CASIMIRO CURBELO CURBELO

Presidente
Cabildo de La Gomera

Desde su conquista a finales del siglo XV, Canarias ha disfrutado de un Régimen Económico y Fiscal excepcional respecto al aplicado en el resto del territorio nacional. Este carácter excepcional se fundamenta en dos principios básicos:

- Desde un punto de vista económico, la libertad comercial y ausencia de monopolios.

- Desde un punto de vista fiscal, la no aplicación de la imposición indirecta estatal con franquicias aduaneras y con un sistema tributario sobre el consumo diferenciado del aplicado en el resto de la nación, que es gestionado por las Administraciones Canarias y destinado a su financiación.

Este último aspecto cobra especial importancia tras la creación en 1912 de los Cabildos Insulares con la configuración que actualmente conocemos, que pasan a tener en los tributos del Régimen Económico y Fiscal su principal fuente de financiación.

Hubo que esperar hasta la Ley 30/1972 (que, por otra parte, acuña la

expresión *Régimen Económico y Fiscal de Canarias*) para que se unificara el sistema impositivo canario, hasta entonces independiente en cada una de las islas. Además, la Ley vuelve a reiterar claramente la vinculación de las especificidades tributarias canarias con la financiación de los Cabildos al señalar en su exposición de motivos que *"Una de las finalidades que persigue la Ley es la de vigorizar la capacidad financiera de las Corporaciones Locales (...). Se reforma también la hacienda insular, con la finalidad de mejorar sus efectos sobre la economía canaria y fortalecer su capacidad financiera (...). y se da una nueva regulación a la participación de los Municipios en la imposición insular (...). La hacienda de los Municipios queda reforzada con la participación de un cuarenta por ciento en los rendimientos que se atribuyan a los respectivos Cabildos Insulares de las cantidades recaudadas por la Junta Provincial de Arbitrios Insulares"*. En similares términos se expresa el texto articulado de la Ley.

Estas particularidades fiscales de Canarias vienen a ser ratificadas y

amparadas por la Constitución Española de 1978 que en su Disposición Adicional Tercera establece que "La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico" y, posteriormente, en la Ley Orgánica 10/1982, del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformada parcialmente por la Ley 4/1196, de 30 de diciembre, repitiendo los dos principios básicos enunciados al principio:

- En primer lugar (artículo 46) se reconoce la existencia del propio régimen económico-fiscal canario "... propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo", al tiempo que se establece como requisito para su modificación la necesidad del informe previo del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.

- En segundo lugar (artículo 50.c)) se establece que son recursos de las Islas el producto de los recursos derivados del régimen económico-fiscal de Canarias.

Es importante destacar este último aspecto. En efecto, el Estatuto de Autonomía vigente atribuye claramen-

te a las Islas y, por tanto, a los Cabildos como sus entes de gobierno, representación y administración, los recursos derivados del REF canario. Por el contrario, al referirse a los recursos de la Comunidad Autónoma (artículo 49) el Estatuto de Autonomía no hace referencia alguna al REF, limitándose prácticamente a la reproducción del contenido del artículo 4 de la LOFCA, es decir, se adopta un esquema similar al de las Autonomías de régimen común.

Con respecto al contenido del nuevo Estatuto sobre la materia, podemos destacar lo siguiente:

- Se mantienen los principios básicos del REF en cuanto a su fundamento histórico y su justificación en el hecho diferencial canario, que se plasman en una imposición local menor a la del resto de España y en las franquicias fiscales sobre el consumo, así como en la no aplicación de ningún tipo de monopolio.

- En cuanto al destino de los recursos, junto con los Cabildos Insulares aparecen ahora como novedad en el texto del Estatuto su utilización como medio de financiación de la Comunidad Autónoma y de los Ayuntamientos, si bien ya venían participando *de facto*.

- Se refuerza el papel del parlamento de Canarias en el trámite de modificación del REF, de tal modo que

únicamente podrá realizarse con informe favorable aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.

- Se crea la Agencia Tributaria de Canarias como ente responsable de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos del REF y de los cedidos por el Estado, que actuará de manera consorciada con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

- Por último, la Disposición Adicional Tercera establece que no se producirá ninguna minoración de la participación de la Comunidad Autónoma

de Canarias en los ingresos del Estado, como consecuencia de la supresión de impuestos estatales que fueran de aplicación en Canarias, en clara referencia al IGTE. Si bien no debe existir objeción alguna sobre tal supresión, se echa de menos que el legislador autonómico no haya precisado que los recursos dejados de compensar a la hacienda estatal deberán considerarse como recursos del REF y, por tanto, les serán de aplicación sus criterios de distribución, dejando zanjadas las desavenencias que a este respecto mantiene el Gobierno de Canarias con las Corporaciones Locales del archipiélago.